



Tribunal Electoral
de Quintana Roo

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO
QUINTANARROENSE.**

EXPEDIENTE: JDC/022/2016.

**PROMOVENTE: EMILIANO
VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ.**

**AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.**

**TERCERO INTERESADO:
CARLOS GERARDO MONTALBÁN
COLÓN.**

**MAGISTRADA PONENTE:
NORA LETICIA CERÓN
GONZÁLEZ.**

**SECRETARIOS:
ELISEO BRICEÑO RUIZ Y
ELIZABETH ARREDONDO
GOROCICA.**

Chetumal, Quintana Roo, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

VISTOS para resolver los autos del expediente **JDC/022/2016** integrado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido por su propio derecho por el ciudadano **Emiliano Vladimir Ramos Hernández**, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Quintana Roo, a fin de impugnar el Acuerdo ACU-CEN-077/2016 de veintiuno de abril de dos mil dieciséis¹, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del citado instituto político, mediante el cual se otorgaron facultades especiales a diversos delegados en varios Estados, entre ellos, Quintana Roo; y

R E S U L T A N D O

¹ En adelante, las fechas que se señalen corresponden al año dos mil dieciséis; en caso de ser distinto se señalará en el texto correspondiente.

I. Antecedentes. De lo manifestado por la promovente en su escrito de demanda y de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprenden los antecedentes siguientes:

A. Acuerdo ACU-CEN-077/2016. Con fecha veintiuno de abril, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, emitió el presente acuerdo mediante el cual se otorgaron facultades especiales a diversos delegados en varios Estados, entre ellos, Quintana Roo.

En el citado acuerdo se estableció que para el caso de Quintana Roo, se nombraron como comisionado político a Abraham Ortega Santana para que en coadyuvancia con el Secretario General Carlos Montealbán realicen funciones ejecutivas.

B. Recurso de queja contra órgano. Con fecha veintiocho de abril, el promovente presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional del citado instituto político, recurso contra órgano, a fin de combatir el acuerdo ACU-CEN-077/2016.

C. Desistimiento de recurso de queja contra órgano. El seis de mayo, ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del citado partido político, el actor presentó escrito de desistimiento de la instancia intrapartidista, a fin de acudir ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano. En fecha seis de mayo, y en virtud del desistimiento antes referido, el ciudadano Emiliano Vladimir Ramos Hernández presentó Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, a fin de impugnar el acuerdo ACU-CEN-077/2016; misma que fue presentada ante la Comisión Nacional Jurisdiccional quien posteriormente se encargó de

remitirla a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

III. Remisión a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con fecha once de mayo, se recepcionó en la Oficialía de Partes de dicho Tribunal, la demanda y demás constancias relacionadas con el medio de impugnación antes referido, siendo radicado bajo el número de expediente SX-JDC-180/2016, turnándose a la ponencia del Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. Acuerdo de Sala. Con fecha trece de mayo, el Pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó en sus puntos de acuerdo PRIMERO y SEGUNDO, lo siguiente:

“PRIMERO. Es **improcedente** el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano promovido por **Emiliano Vladimir Ramos Hernández**.

SEGUNDO. Se **reencauza** el presente medio de impugnación a **juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano quintanarroense** ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, a efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones determine lo que en Derecho corresponda.”

V. Remisión al Tribunal Electoral de Quintana Roo. Con fecha dieciséis de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio número SG-JAX-454/2016, por medio del cual se notifica a este órgano jurisdiccional local, el acuerdo de Sala referido con antelación; remitiéndose el escrito de demanda y las constancias relacionadas con el medio de impugnación antes precisado.

VI. Radicación y Turno. El diecisiete de mayo, mediante acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal, se radicó el citado medio de impugnación bajo el número de expediente JDC/022/2016, turnándose a la ponencia de la Magistrada Nora Leticia Cerón González, para los efectos

previstos en el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. Acuerdo. El dieciocho de mayo, mediante acuerdo el Magistrado Presidente dio cuenta del oficio sin número presentado por el ciudadano Emiliano Vladimir Ramos Hernández, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando para tales efectos a Eduardo Arreguin Chávez.

VIII. Acuerdo de Tercero Interesado. Mediante auto de fecha veintiuno de mayo, el Magistrado Presidente dio conocimiento del escrito de tercero interesado y anexos presentado por el ciudadano Carlos Gerardo Montalbán Colón, quien se ostenta como Secretario General con funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, para los efectos correspondientes; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal, es competente para conocer del presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los artículos 49 fracciones II, párrafo octavo y V, ambas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 8, 44, 49, 94 y 97 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 párrafo primero y 21 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense interpuesto por el ciudadano Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Quintana Roo, en contra del Acuerdo ACU-CEN-077/2016 de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del citado instituto político,

mediante el cual se otorgaron facultades especiales a diversos delegados en varios Estados, entre ellos, Quintana Roo.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la litis planteada, se deben examinar las causas de improcedencia invocadas por las partes.

En el presente juicio, es de señalarse que no resulta procedente que este Tribunal conozca y resuelva del mismo, en razón de las consideraciones siguientes:

El artículo 95 fracción VII de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral², dispone que el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano quintanarroense, procederá cuando considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político electorales.

Asimismo, el artículo 96 párrafo segundo de la citada Ley de Medios, señala que en los casos de actos o resoluciones dictados por órganos partidistas, se deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.

Por su parte, el artículo 31 fracción XI de la referida Ley adjetiva, prevé como causal de improcedencia la falta de agotamiento de instancias previas. Ha sido criterio sostenido por los Tribunales Electorales de nuestro país, que para entrar al estudio de fondo de un medio impugnativo resulta necesario que el acto o resolución reclamada sea definitivo y firme, esto es, que no sea susceptible de ser modificado o revocado.

La excepción a lo citado, se basa en el criterio de este Tribunal Electoral que refiere que cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación se

² En lo sucesivo Ley de Medios.

traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio resulta válido tener por colmado el principio de definitividad y por consiguiente conocer del asunto bajo la figura jurídica del *per saltum* o salto de instancia, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos.³

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 9/2001 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO.”

En el presente asunto, el actor se duele de la emisión del acuerdo ACU-CEN-077/2016, de veintiuno de abril, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se nombró a Abraham Ortega Santana para que en coadyuvancia con Carlos Gerardo Montalbán Colon, Secretario General en funciones de Presidente realicen las actividades ejecutivas del citado órgano partidista en el Estado.

Lo anterior, en razón de que el justiciable presentó el veintiséis de marzo ante los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, su solicitud de licencia a partir del veintisiete de marzo hasta el ocho de abril, a fin de participar en la elección interna que realizó el Comité Ejecutivo Nacional respecto de las personas que serían postuladas como candidatos a Diputados locales por el Principio de Representación Proporcional en el Estado; reincorporándose a sus funciones el día nueve de abril.

No obstante, el actor aduce que se le ha impedido regresar a su cargo, pues el Comité Ejecutivo Nacional procedió a su sustitución, a través de la aprobación del acuerdo ACU-CEN-077/2016, por medio del cual nombró a Carlos Gerardo Montalbán Colon, Secretario General en funciones de Presidente, y a Abraham Ortega Santana para que en coadyuvancia realicen

³ Expediente SX-JDC-180/2016. Consultable en www.trife.gob.mx

las actividades ejecutivas del citado órgano partidista en el Estado. Dicha situación, a juicio del actor provoca que haya doble funciones y un desequilibrio político en el seno del Comité Ejecutivo Estatal.

A dicho del actor, en el presente juicio se cumple con el principio de definitividad, toda vez que se agotó la instancia previa ya que este recurso se promovió primigeniamente ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, instancia de la cual se desistió debido a la urgencia con que este asunto debe ser resuelto a la brevedad y en forma definitiva.

Lo anterior es así, ya que a dicho del impetrante, el acto reclamado está generando efectos perniciosos al Partido de la Revolución Democrática en el Estado, debido a que actualmente se encuentran en la recta final de la elección de Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos en el Estado, y resulta necesario que se confirme que el actor es el dirigente estatal de dicho partido político en Quintana Roo, para seguir desarrollando con certeza las actividades proselitistas que legalmente le corresponden en el presente proceso electoral.

Al respecto, este Tribunal considera que los actos impugnados por el actor no generan riesgo inminente de que puedan extinguirse, ello es así, porque de la lectura realizada al escrito de demanda se advierte que la pretensión de Emiliano Vladimir Ramos Hernández, es que este órgano jurisdiccional resuelva de manera urgente el presente asunto, ya que en su decir, dicha situación está generando efectos perniciosos al Partido de la Revolución Democrática en el Estado, debido a que actualmente se encuentran en la recta final del proceso electoral local.

Además, contrario a lo argüido por el promovente, el Comité Ejecutivo Estatal del instituto político en comento, está en aptitud de continuar con el desarrollo propio de sus actividades, toda vez que dicho órgano partidista no quedó acéfalo, tan es así, que el acto controvertido en el presente asunto es el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional mediante el

cual nombró a un Comisionado Político para que coadyuve con el Secretario General de esta entidad federativa teniendo como parte de sus atribuciones atender el proceso de campaña electoral en el periodo 2015-2016 y tener a su cargo las finanzas del partido a nivel estatal; de ahí que no exista riesgo inminente de que la pretensión de actor pueda extinguirse en forma alguna, como lo alega en su escrito de demanda, ni que su demanda sea resuelta de forma urgente, **por lo que de ninguna manera perjudica al actor ni al órgano político, el agotamiento de la instancia previa.**

Al respecto, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que el principio de definitividad se cumple cuando se agotan previamente las instancias que reúnan las dos características siguientes: a) que sean idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate; y b) que conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular a éstos.

En este sentido, es de señalarse que en los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, así como en el Reglamento de Disciplina Interna del citado partido, se establecen los medios de impugnación que de ser el caso pueden hacerse valer los afiliados y/o militantes partidistas que consideren que se han vulnerado sus derechos al interior de los órganos partidarios.

Por otra parte, el artículo 31 fracción XI de la Ley de Medios establece como caso de excepción al principio de definitividad, aquellos donde se considere que los órganos partidistas competentes no estuviesen integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso; situación que en el caso que nos ocupa no se acreditan.

Por lo tanto, al no haber agotado de manera previa las instancias intrapartidarias, tal como lo dispone los artículos 31, fracción XI y 96

párrafo segundo de la Ley de Medios, y no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, resulta suficiente para declarar la improcedencia del presente juicio y reencauzarlo a la vía intrapartidaria correspondiente, sin que con ello se prejuzgue la procedencia del mismo.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 9/2012 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: “REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE.”

El artículo 17 inciso j) de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática dispone que toda afiliada o afiliado del partido tiene derecho a que se le administre justicia por los órganos partidistas facultados para ello por este Estatuto y los Reglamentos que de éste emanen, dentro de los plazos y términos que fijen estos, emitiendo sus resoluciones fundadas y motivadas y de manera pronta, expedita, completa e imparcial.

Por su parte, el capítulo cuarto denominado “De las Quejas contra Órgano” del Reglamento de Disciplina Interna del citado instituto político, señala que dicho medio impugnativo procede contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos del Partido de la Revolución Democrática cuando se vulneren derechos de las personas afiliadas al Partido o a los integrantes de los mismos, de igual manera establece el procedimiento, los plazos y términos en los cuales deberá sustanciarse la queja intrapartidista.

Asimismo, los artículos 2 y 4° del Reglamento de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática señala que dicha Comisión, es el órgano jurisdiccional del Partido encargado de garantizar, en última instancia, los derechos de las personas afiliadas al Partido y de resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del Partido. Las resoluciones de la Comisión Nacional Jurisdiccional serán

definitivas, inatacables y de acatamiento obligatorio para las personas afiliadas y órganos del Partido; exceptuando aquellas resoluciones en las que el propio Estatuto disponga lo contrario.

De lo anterior, se colige que la instancia intrapartidaria competente para conocer y resolver del presente asunto es la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, en tal sentido, toda vez que se encuentran cumplimentadas las reglas de trámite previstas en los artículos 83, 84 y 88 del Reglamento de Disciplina Interna del citado instituto político, se **ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, resuelva dentro del término previsto en el artículo 57 del referido Reglamento de Disciplina Interna, debiendo informar a este Tribunal del cumplimiento de la presente ejecutoria, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes a que hubiese realizado lo antes ordenado.**

En consecuencia, lo procedente es declarar **improcedente** el presente juicio ciudadano por las consideraciones antes vertidas, y **reencauzar la demanda como queja contra órgano, competencia de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática para que, conforme a su competencia y atribuciones resuelva lo que conforme a Derecho proceda.**

Por lo anteriormente fundado y motivado, se

R E S U E L V E

PRIMERO.- Se declara **improcedente** el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, interpuesto por el ciudadano Emiliano Vladimir Ramos Hernández, de conformidad con lo señalado en el Considerando último de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se **reencauza** el presente medio de impugnación a **queja contra órgano** ante la **Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática**, para efecto de que **resuelva dentro del término previsto en el artículo 57 del Reglamento de Disciplina Interna del**

citado instituto político, debiendo informar a este Tribunal del cumplimiento de la presente ejecutoria, **dentro del término de las veinticuatro horas siguientes** a que hubiese realizado lo antes ordenado.

TERCERO. Previas las anotaciones que correspondan, **remítase** el original del escrito de demanda y sus anexos a la **Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática**, debiendo quedar copia certificada de dichas constancias en el archivo de este Tribunal.

CUARTO. Notifíquese: Personalmente, al actor en el domicilio señalado para tales efectos; **Por oficio**, a la **Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática**, y **por estrados** a los demás interesados en términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publíquese de inmediato en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 91 y 97 fracción II, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS

MAGISTRADA

MAGISTRADO

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ

VICENTE AGUILAR ROJAS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS



JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE